

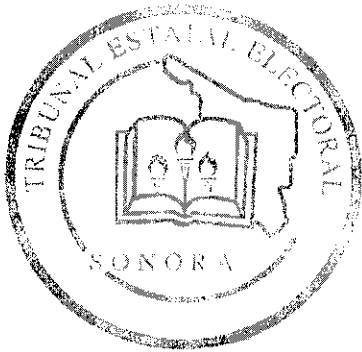
RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: RA-PP-07/2020.

RECURRENTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE
SONORA.

MAGISTRADO PONENTE: LEOPOLDO
GONZÁLEZ ALLARD.



Hermosillo, Sonora, a veintidós de octubre de dos mil veinte.

VISTOS para resolver los autos del recurso de apelación identificado bajo el expediente con clave RA-PP-07/2020, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, en contra del ACUERDO CG35/2020 *"POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE PARIDAD DE GÉNERO QUE DEBERÁN OBSERVARSE EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA."*, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria de fecha quince de septiembre de dos mil veinte; los agravios expresados, todo lo demás que fue necesario ver; y,

RESULTANDO

PRIMERO. Antecedentes. De las constancias del expediente y de las afirmaciones del recurrente, se advierten los datos relevantes siguientes:

1. En fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación.
2. En fecha tres de noviembre del dos mil dieciséis, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 91, que reforma el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora.
3. En fecha seis de junio de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tuvo impacto en materia de paridad de género.
4. En fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 82, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el

Estado de Sonora, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el Código Penal del Estado de Sonora, en el cual se reforman diversas disposiciones de la ley electoral local, en materia de género.

5. En fecha trece de abril de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

6. En fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 120, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de paridad de género y violencia política de género.

7. Con fecha quince de septiembre del presente año, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el ACUERDO CG35/2020 *"POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE PARIDAD DE GÉNERO QUE DEBERÁN OBSERVARSE EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA."*

SEGUNDO. Recurso de Apelación.

I. Presentación del medio de impugnación. Inconforme con el acuerdo antes referido, el día diecinueve de septiembre de dos mil veinte, el C. Sergio Cuellar Urrea, en su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Sonora, interpuso recurso de apelación en su contra.

II. Recepción del Tribunal Estatal Electoral. Mediante auto de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, este Tribunal Electoral, tuvo por recibido tanto el aviso de interposición del medio de impugnación, como el recurso de apelación y anexos del medio interpuesto, registrándolo bajo expediente con clave RA-PP-07/2020; ordenó su revisión por el Secretario General, para los efectos de los artículos 354, fracción I y 327 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; asimismo, se tuvo tanto al recurrente como al Instituto Electoral local, señalando domicilio para recibir notificaciones, autorizados para recibirlas y por exhibidas las documentales que remite la Autoridad Responsable a que se refiere el artículo 335 de la legislación en cita.

III. Admisión del Recurso. Con fecha siete de octubre del año en curso, se admitió el Recurso de Apelación, por estimar que el medio de impugnación reunía los requisitos

previstos en el artículo 327 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; se tuvieron por recibidos los escritos de terceros interesados a los CC. Luz Esthela Córdova de la Cruz, Jesús Eduardo Chávez Leal, Representante Propietario del Partido Acción Nacional, Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, Representante Suplente del Partido Morena y Heriberto Muro Vásquez, Representante Propietario de Movimiento Ciudadana, en términos de lo dispuesto en el artículo 329, fracción III, de la legislación electoral local; se les tuvo por señalado domicilio para recibir notificaciones y autorizados para recibirlas. Se admitieron las pruebas ofrecidas tanto del recurrente como de la autoridad responsable y los terceros interesados, se ordenó la publicación del auto de admisión en los estrados de este Tribunal Estatal Electoral.

IV. Turno a ponencia. En términos de lo previsto por el artículo 354, fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se turnó el presente medio de impugnación al Magistrado Leopoldo González Allard, Titular de la Primera Ponencia, para que formule el proyecto de resolución correspondiente.

Substanciado que fue el medio de impugnación, y toda vez que no existe trámite alguno pendiente de realizar, queda el asunto en estado de dictar sentencia, ha lugar a formular el proyecto de resolución, misma que hoy se dicta, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Estatal Electoral de Sonora, es competente para conocer y resolver sobre el presente asunto, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 116, apartado IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105, numeral 1, 110 y 111 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora y en los diversos 322, párrafo segundo, fracción II, 323, 353 y 354, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por tratarse de un recurso de apelación promovido por un partido político nacional con acreditación local, que impugna un acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

SEGUNDO. Finalidad del Recurso de Apelación. La finalidad específica del Recurso de Apelación está debidamente precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 347 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que establece que las resoluciones que recaigan al referido recurso tendrán como efecto la confirmación, modificación o revocación del acto, acuerdo, omisión o resolución impugnados.

TERCERO. Estudio de procedencia. En relación al medio de impugnación presentado, se estima que reúne los requisitos de procedencia previstos en el artículo 327 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, según se precisa:

I. Oportunidad. El recurso de apelación fue presentado ante la autoridad responsable, dentro del plazo legal de cuatro días hábiles, conforme lo previsto por el artículo 326 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pues de las constancias sumariales se advierte que el acto impugnado fue emitido el quince de septiembre de dos mil veinte, mientras que el recurso fue presentado el día diecinueve del propio mes y año, por tanto, resulta evidente que se interpuso con la debida oportunidad.

II. Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito, se hizo constar tanto el nombre, domicilio para recibir notificaciones y a quién en su nombre se deba notificar, de igual forma contiene la firma autógrafa del promovente, así como la identificación del acuerdo impugnado, los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que en su concepto le causa el mismo y los preceptos legales que se estimaron violados, así como la relación de pruebas y los puntos petitorios.

III. Legitimación. El Partido Revolucionario Institucional, está legitimado para promover el recurso por tratarse de un partido político, en términos del artículo 329 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. La personería de quien comparece en su nombre y representación, quedó acreditada con la copia certificada de la acreditación de C. Sergio Cuéllar Urrea como Representante Propietario del referido instituto político, ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

IV. Terceros interesados. La ciudadana Luz Esthela Córdova de la Cruz, por su propio derecho, así como los partidos Acción Nacional, MORENA y Movimiento Ciudadano, a través de sus representantes acreditados ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, comparecieron mediante sus respectivos escritos, con el carácter de terceros interesados en el presente juicio a manifestar que el acuerdo impugnado fue aprobado conforme a la ley, ya que en el mismo se establecen de forma correcta los parámetros para garantizar el cumplimiento de la paridad de género en la conformación de la legislatura local, los cuales reúnen los requisitos que exige para su admisión el artículo 334, párrafo cuarto, del citado ordenamiento, conforme a los razonamientos que se desarrollan a continuación:

a) Forma. Los escritos de tercero interesado se presentaron ante la autoridad responsable; se hizo constar el nombre y firma de quien compareció con tal carácter, así como la razón del interés jurídico en que funda su pretensión concreta.

b) Oportunidad. Los escritos de tercero interesado se exhibieron oportunamente, pues se presentaron dentro del plazo de setenta y dos horas, como lo indica el artículo 334, párrafo cuarto, en relación con la fracción II del párrafo primero del mismo artículo de la ley electoral para la entidad.

c) Legitimación y personería. Los partidos políticos Acción Nacional, MORENA y Movimiento Ciudadano, tienen legitimación para comparecer como tercero interesado, en los términos de lo establecido en el artículo 329, fracción III de la LIPEES, toda vez que

tienen un interés legítimo derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor. Asimismo, se tiene reconocida la personería de quienes comparecen como representantes de dichos partidos políticos, pues la calidad se reconoce por la responsable.

En cuanto a la C. Luz Esthela Córdova de la Cruz, comparece por su propio derecho, por su condición de mujer y ciudadana sonorense, por lo que tiene interés en que se confirme el acuerdo impugnado, ya que versa sobre el acceso efectivo y material al poder público de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres y pertenece al grupo colectivo a favor del cual se pretende la instauración de la medida alegada.

Sirve de sustento, en lo conducente, la Jurisprudencia 8/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "INTERÉS LEGÍTIMO. LAS MUJERES LO TIENEN PARA ACUDIR A SOLICITAR LA TUTELA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR".

CUARTO. Síntesis de agravios. Resulta innecesario transcribir los motivos de inconformidad esgrimidos por el accionante, sin que por ello se trasgredan los principios de congruencia y exhaustividad que deben regir en el dictado de las sentencias, ni se afecte a las partes contendientes, habida cuenta que éstos se encuentran satisfechos cuando el Tribunal precisa los planteamientos esbozados en la demanda, los estudia y da respuesta acorde, como quedará definido en el considerando siguiente.

Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. /J. 58/2010, de rubro: "**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN**".

Lo expuesto no es óbice para realizar una síntesis de los agravios, sin soslayar el deber que tiene este órgano jurisdiccional de examinar e interpretar íntegramente la demanda, a fin de identificar los agravios hechos valer, con el objeto de llevar a cabo su análisis, siempre y cuando éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.

Resultan aplicables las jurisprudencias 4/99 y 3/2000, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "**MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR**" y "**AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR**".

En la especie, del escrito de impugnación se desprenden las manifestaciones siguientes 

En primer término, alega la violación de los principios de fundamentación y motivación, legalidad, certeza y reserva de ley, por la supuesta inaplicación del artículo 170 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, sobre la base de que la acción afirmativa contenida en el artículo 2 de los Lineamientos impugnados, no tiene una justificación constitucional, legal, reglamentaria o jurisprudencial, para la inaplicación del procedimiento de asignación de curules por el principio de representación proporcional, debido a que no se establecen los motivos o razones particulares o especiales para estimar que el género subrepresentado debe ser compensado mediante la alteración de las listas,

Asimismo, señala que la previsión de una medida alternativa en los lineamientos aprobados a través del acuerdo que se impugna, viola el contenido del artículo 105, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las modificaciones sustanciales a las normas de carácter electoral, deben realizarse a más tardar noventa días antes de que inicie el proceso electoral de que se trate; por lo que se violenta el principio de certeza.

Afirma lo anterior, pues estima que los lineamientos impugnados, con independencia de su jerarquía normativa, modifican substancialmente las reglas del proceso electoral, ya que prevén una alteración en el procedimiento establecido por el artículo 170 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de que contraviene el principio de reserva de ley, en tanto que la responsable excede el ámbito de su competencia, al aprobar lineamientos que material y formalmente derogan o inaplican una disposición legal emitida por el legislativo estatal.

Del mismo modo, se duele de la transgresión al artículo 35 de la Constitución General de la República respecto al voto activo de la ciudadanía, pues estima que los lineamientos impugnados, transgreden el derecho político-electoral de los ciudadanos en su vertiente del voto activo, toda vez que al aprobar la posible modificación en el orden de prelación de las listas registradas por los partidos políticos de candidatos a diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, para la sustitución de un género sobre otro que resulte subrepresentado, desvirtúa la voluntad de los electores y desnaturaliza el objeto y fin del voto, pues su efecto, respecto de la elección de diputadas y diputados de representación proporcional, dependerá de factores diversos de la voluntad del sufragante; además de que se contravienen las bases generales salvaguardadas por la Constitución Federal, que garantizan la efectividad del sistema electoral mixto, según lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De igual manera alega el inconforme que la autoridad responsable aprobó los lineamientos impugnados sin contar con las facultades para ello, pues del análisis de los artículos 101, 110, 111, 114 y 121 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, no se desprende atribución alguna para llevar a cabo una acción afirmativa que implique la alteración del orden de prelación de las listas de candidatos a diputadas y diputados de representación proporcional registradas por los partidos políticos y, por el contrario, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

sólo puede resolver sobre el registro de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, vigilando el principio de igualdad de género con base en las reglas establecidas en la ley electoral local.

Como último agravio, el inconforme se duele de la inaplicación del SEGUNDO TRANSITORIO del Decreto 120 que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, al establecer en los lineamientos combatidos, la obligación de que las listas de candidatos a diputados y diputadas por el principio de representación proporcional, que registren todos los partidos políticos, deben iniciar con el género femenino, sobre la base de que en el proceso electoral anterior 2017-2018, casi la totalidad de las listas registradas por los institutos políticos iniciaron con el género masculino.

Afirma que dicha disposición contenida en los lineamientos, de hecho deroga el contenido del transitorio Segundo de la reforma aprobada por el Congreso del Estado el veintinueve de mayo, y de cuyo contenido se desprende que la obligación de alternancia en el orden de prelación entre mujeres y hombres, respecto a la lista registrada en el proceso anterior, comenzará a regir para el proceso electoral 2023-2024.

QUINTO. Método de estudio.

El análisis de los agravios hechos valer por el representante del Partido Revolucionario Institucional, deja al descubierto los siguientes aspectos:

Pretensión: La pretensión del apelante es que se revoque la determinación de la responsable en el acuerdo impugnado y se eliminen las disposiciones contenidas en los artículos 2, 11, inciso c), 16 y 17 de los Lineamientos que Establecen los Criterios de Paridad de Género que serán observados en el Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de Sonora, los cuales previenen la implementación de acciones afirmativas en el registro y asignación de diputados y diputadas por el principio de representación proporcional.

Causa de pedir. La causa de pedir la funda el partido accionante en el hecho de que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, carece de atribuciones para inaplicar las reglas y procedimiento de asignación de diputados y diputadas por el principio de representación proporcional, previsto por el artículo 170 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, afectando los principios de legalidad y certeza, rectores de la materia electoral.

Litis. De ahí que, la Litis en el presente asunto consiste en determinar si fue correcto el proceder de la autoridad responsable de prever en los lineamientos que se combaten, medidas afirmativas en materia de paridad de género a favor de las mujeres, a fin de lograr en la mayor medida la integración paritaria del Congreso del Estado en la próxima legislatura, o bien como lo aduce el apelante, se extralimitó en sus funciones.

SÉXTO. Estudio de fondo.

A juicio de este Tribunal, el análisis de los agravios expresados, en relación con el acuerdo impugnado, permite concluir que los mismos resultan en parte infundados y fundados por otra, pero suficientes para modificar el mismo.

Parra arribar a la anterior determinación primeramente resulta de primordial importancia dejar establecido que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al ejercer su facultad de atracción y resolver el juicio de revisión constitucional electoral, identificado con la clave SUP-JRC-14/2020, estableció criterios orientadores para todas las autoridades electorales del país, tanto administrativas como jurisdiccionales, en materia de paridad de género, que sirven como marco teórico y jurídico, para resolver la presente controversia.

Así es, en la referida sentencia, al respecto de la paridad de género estableció lo siguiente:

“...1. El deber de implementar medidas internas para el ejercicio de derechos y libertades.

A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, el reconocimiento de los derechos en el plano nacional se realiza en un bloque de constitucionalidad en el que convergen, con idéntica jerarquía normativa, los mandatos contenidos en el Pacto Federal y los contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

El ordenamiento constitucional, en congruencia con el reconocimiento de los derechos humanos, dispone obligaciones generales (promover, respetar, proteger y garantizar) a cargo de todas las autoridades del país, mediante la observancia de determinados principios (universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad).

Por cuanto atañe a las mencionadas obligaciones generales, cabe señalar, en términos generales, que el deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no perpetren violaciones de derechos humanos; en tanto que el deber de garantía presupone obligaciones positivas, esto es, que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar los derechos humanos reconocidos en el bloque de constitucionalidad.

Determinar los alcances del deber de respetar los derechos humanos, así como de la garantía de su libre y pleno ejercicio, lleva a la interpretación, de manera subsidiaria, de lo dispuesto en el artículo 1, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en términos de lo previsto en el artículo 2 de la citada convención, cuando el “ejercicio de los derechos y libertades no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter”, para lo cual, los Estados Partes están comprometidos a adoptar “las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”

No pasa inadvertido que de conformidad con lo previsto en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política, las leyes electorales federal y locales deben promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales; sin embargo, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la convención que se consulta, no sólo se limita a

medidas de carácter legislativo, al permitirse la adopción de medidas de "otro carácter", las cuales válidamente pueden implementarse, por ejemplo, por las autoridades administrativas electorales, federal o locales, en el ámbito de sus facultades y competencia.

Por lo tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 1, párrafos primer y tercero; 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se sigue que los derechos humanos reconocidos en el bloque de constitucionalidad deben ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados por todas las autoridades que integran el estado nacional; y que si su ejercicio no se encuentra garantizado en disposiciones legislativas o de otro carácter, entonces, el Estado Mexicano, por conducto de sus autoridades de cualquier nivel, tiene el compromiso de adoptar cualquier tipo de medida que fuera necesaria para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Por lo tanto, si de conformidad con plazos bajo los que se rige la promulgación y publicación de las leyes federales y locales en materia electoral, se descartara la posibilidad de la entrada en vigor de alguna reforma legislativa tendente a garantizar el ejercicio de algún derecho humano reconocido en el bloque de constitucionalidad, tal situación lleva consigo a que las autoridades electorales administrativas, en el ejercicio de sus atribuciones, de manera precautoria y provisional, emitan los acuerdos, lineamientos o cualquier otra medida en materia electoral, que tienda al mismo fin; ya que de lo contrario, subsistiría un incumplimiento al deber convencional de adoptar disposiciones de derecho interno para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el riesgo de que el Estado Mexicano incurriera en responsabilidad internacional.

En el caso, las medidas implementadas por las autoridades electorales administrativas deben cumplir al menos con tres elementos:

- a) No exceder el ejercicio de la facultad legislativa ni el principio de reserva de ley;
- b) Aprobarse con una anticipación suficiente que haga factible su definitividad antes del inicio del registro de candidaturas (paridad en la postulación) o el desarrollo de la jornada electoral (paridad en la integración); y
- c) Sean de carácter temporal, por lo cual, únicamente deben aplicarse al proceso electoral para el cual se expidan.

2. La paridad como principio que permite alcanzar la igualdad en el ejercicio de derechos político-electorales entre mujeres y hombres

En el ámbito político electoral, la paridad constituye una de las vías que concretiza el principio de igualdad y no discriminación, y es por ello, que el respaldo constitucional y convencional que rige estos mandatos se extiende también para aquélla.

Los artículos 1, párrafo quinto y 4, párrafo primero, de la Constitución Federal, reconocen el principio de igualdad y no discriminación, así como el derecho a la igualdad legal de la mujer y el hombre.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que la igualdad, como principio adjetivo, presenta dos modalidades:

- La igualdad formal o de derecho, que protege contra distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que se dirige a la autoridad materialmente legislativa y que consiste en el control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. Su violación da lugar a actos discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o en

norma obedece explícitamente a un factor prohibido o no justificado constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos, que se dan cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero su efecto o resultado lleva a una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista justificación objetiva para ello; y

- La igualdad sustantiva o de hecho, que radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos. Por ello, su violación surge cuando existe una discriminación estructural contra un grupo social o sus integrantes y la autoridad no lleva a cabo las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación; además, su violación también puede reflejarse en omisiones, en una desproporcionada aplicación de la ley o en un efecto adverso y desproporcional de cierto contenido normativo, contra un grupo social relevante o de sus integrantes, con la diferencia de que, respecto a la igualdad formal, los elementos para verificar la violación dependerán de las características del propio grupo y la existencia acreditada de la discriminación estructural y/o sistemática.

En diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, se establecen medidas encaminadas a proteger y garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer, así como a lograr la participación en la vida política del país de ésta, en condiciones de igualdad, a saber:

- El artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone que los Estados partes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos reconocidos en el propio pacto.

- El artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, dispone que todas las personas son iguales ante la ley, por lo que tienen derecho, sin discriminación, a igual protección.

- El artículo III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, dispone que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

- El artículo 4, incisos f) y j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém Do Pará"), dispone que todas las mujeres tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: la igual protección ante la ley y de la ley, así como a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos.

- El artículo 3 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), dispone que los Estados parte tomarán, en todas las esferas y, en particular, en la política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres. Asimismo, el artículo 7, inciso b), de la CEDAW, dispone que los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas; ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en el Consenso de Quito, adoptado en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina

y el Caribe, se acordó, entre otras cuestiones, la promoción de acciones que faciliten el avance hacia el logro de la paridad en cargos públicos y de representación política; así como, el desarrollo de políticas electorales de carácter permanente que conduzcan a los partidos políticos a incorporar las agendas de las mujeres en su diversidad, el enfoque de género en sus contenidos, acciones y estatutos y la participación igualitaria, el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres, con el fin de consolidar la paridad de género como política de Estado. Dicho Consenso supuso un gran avance en la región al reconocer que:

"[...] la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las de las mujeres".

De igual forma, en la Recomendación General 25 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se expuso que las medidas especiales son parte de una estrategia estatal para lograr la igualdad sustantiva o de facto de las mujeres.

En lo concerniente a la paridad, conviene tener en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe "El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en las Américas", concluye que los Estados deben asegurar que las mujeres tengan una representación apropiada en todos los niveles de gobierno, en el orden local, provincial o estatal y nacional; así como desarrollar estrategias para incrementar la integración de las mujeres en los partidos políticos; y adopten medidas adicionales para incorporar plenamente a los sectores de la sociedad civil, incluyendo aquéllos que representen los intereses de las mujeres, en los procesos de desarrollo e implementación de políticas y programas .

En adición a lo anterior, cabe señalar que el artículo 3 de la "Norma Marco para consolidar la Democracia Paritaria en América Latina" señala que la democracia paritaria es un modelo en el que la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres son ejes vertebradores de las transformaciones que asume un Estado responsable e inclusivo, cuyos fines son:

- a) El establecimiento de un nuevo contrato social y formal de organización de la sociedad por el cual se erradique toda exclusión estructural, en particular, hacia mujeres y niñas; y*
- b) Un nuevo equilibrio social entre hombres y mujeres en el que ambos contraigan responsabilidades compartidas en todas las esferas de la vida pública y privada.*

Por su parte, el artículo 4.3. de la "Norma Marco", define la paridad como una medida democratizadora que implica la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los procesos decisorios del ámbito público y privado; y refiere que, si se le entiende como una meta de los poderes públicos para su legitimación democrática, entonces, debería también ser una aspiración del sector privado, la academia o la sociedad civil.

De todo lo antes expuesto, queda de relieve que la paridad es una vía que posibilita de manera efectiva el acceso de las mujeres a la vida política y que su implementación lleva al cumplimiento de los mandatos de igualdad y no discriminación, acentuando la calidad de la democracia de nuestro sistema político nacional.

3. Las reformas constitucionales y legales que incorporan la paridad como eje rector.

La paridad se incorporó como un vértice dentro del sistema jurídico mexicano a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil diecinueve, del decreto por el que se reformaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros; en el cual, de manera general, se dispuso la paridad, vertical y horizontal, como eje rector en la integración del poder legislativo federal y local, de los municipios y los órganos autónomos; y regula acciones afirmativas como el encabezamiento alternado de listas de representación proporcional al senado y a las diputaciones en general.

Las reformas constitucionales en materia de paridad de géneros quedaron impactadas de la manera siguiente:

"Artículo 2º. ...

...

A. ...

I. ... a VI. ...

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables.

...

VIII. ...

B. ...

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

...

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I. ...

II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

III. ... a VIII. ...

Artículo 41. ...

La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio.

...

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas

que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

...

II. ... a VI. ...

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados o diputadas de mayoría.

Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras y senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinomial nacional, conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

...

Artículo 94. ...

...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, Ministras y Ministros, y funcionará en Pleno o en Salas.

...

La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género.

...

Artículo 115. ...

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado."

En lo que interesa, los Transitorios del decreto de referencia dispusieron lo siguiente:

"[...]

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá, en un plazo improrrogable de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizar las adecuaciones normativas correspondientes a efecto de observar el principio de paridad de género establecido en esta Constitución, en los términos del segundo párrafo del artículo 41.

TERCERO.- La observancia del principio de paridad de género a que se refiere el artículo 41, será aplicable a quienes tomen posesión de su encargo, a partir del proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, según corresponda.

Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su integración y designación habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan, de conformidad con la ley.

CUARTO.- Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41."

Al tenor de lo dispuesto en los Transitorios Segundo y Tercero, en relación con lo previsto en el artículo 41, párrafos segundo y tercero, Base I, se advierte que la paridad de género constitucional presenta dos escenarios:

- Por un lado, en el nombramiento de personas titulares de las secretarías de despacho de los poderes ejecutivo federal y de las entidades federativas; en la integración de los órganos autónomos, así como en la designación y nombramiento de las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales; y*
- Por otro lado, en la postulación de candidaturas a los distintos cargos de elección popular.*

En este sentido, queda de manifiesto que la paridad, como principio de base constitucional y convencional, repercute en la integración de órganos o cuerpos colegiados, la cual puede llevarse a cabo mediante la postulación de candidaturas durante los procesos electorales, federal o locales, bien, mediante una designación o nombramiento de carácter administrativo.

Esta distinción resulta de relevancia, por lo que enseguida se razona.

De conformidad con el artículo Transitorio Cuarto del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil diecinueve, las legislaturas de las entidades federativas deben realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41 constitucional; sin embargo, cabe destacar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, del ordenamiento constitucional que se consulta, **las reformas de paridad en materia electoral deben promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse.**

Esto significa que, tratándose de **reformas legislativas federal o locales relacionadas con la paridad de autoridades y cuerpos colegiados que no se renuevan mediante procesos electorales federal o locales, su promulgación y publicación podrá realizarse en cualquier momento.**

Ahora bien, en cumplimiento al Transitorio Segundo transcrito con anterioridad, el pasado trece de abril de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por medio del que, el Poder Legislativo federal reformó diversas disposiciones legales que, entre otros temas, abordan el principio de paridad.

Dichas reformas legales en el plano federal fijan reglas en materia paritaria que repercuten en los procesos electorales federal y locales, como se advierte de los preceptos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que a continuación se transcriben:

"Artículo 3.

1. ...

a) a c) ...

d) Ciudadanos o Ciudadanas: Las personas que teniendo la calidad de mexicanas reúnan los requisitos determinados en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

d bis) Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación;

e) a g)...

Artículo 6.

1. ...

2. El Instituto, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

...

Artículo 26.

1. Los poderes Ejecutivo y Legislativo de las 32 entidades federativas de la República se integrarán y organizarán conforme lo determina la Constitución, las constituciones de cada estado, así como la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes respectivas.

2. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, conformado por una Presidencia Municipal y el número de integrantes que determine la Constitución y la ley de cada entidad, así como los órganos político-administrativos, según la legislación aplicable en la Ciudad de México.

En el registro de las candidaturas a los cargos de presidente o presidenta, alcalde o alcaldesa, concejallas, regidurías y sindicaturas de los Ayuntamientos, los partidos políticos deberán garantizar el principio de paridad de género.

Las fórmulas de candidaturas deberán considerar suplentes del mismo género que la persona propietaria.

3. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, así como el de elegir a sus autoridades, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas, garantizando el principio de paridad de género, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2o. de la Constitución, de manera gradual.

4. Los pueblos y comunidades indígenas en las entidades federativas elegirán, de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad y paridad, guardando las normas establecidas en la Constitución, las constituciones locales y las leyes aplicables.

Artículo 207.

1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, de quienes integran los ayuntamientos en los estados de la República y las Alcaldías en la Ciudad de México. En la elección e integración de los Ayuntamientos y Alcaldías existirá la paridad de género tanto vertical como horizontal.

Artículo 232.

1. ...

2. Las candidaturas a diputaciones tanto locales como federales y a senadurías a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatas y candidatos compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatas o candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas, las planillas de Ayuntamientos y de las Alcaldías.

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, deberán rechazar el registro del número de candidaturas de un género que no garantice el principio de paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

5. ...

Artículo 233.

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputaciones locales y federales, senadurías, así como a las planillas a Ayuntamientos y Alcaldías que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto y organismos públicos locales, según corresponda, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución.

Artículo 234.

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos y candidatas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad, hasta agotar cada lista.

2. En el caso de las diputaciones, de las cinco listas por circunscripción electoral, al menos dos deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género, alternándose en cada periodo electivo.

3. Tratándose de las senadurías, la lista deberá encabezarse alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo.

Artículo 235.

1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo establecido en los artículos 233 y 234, el Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, en el ámbito de sus competencias, le requerirá en primera instancia para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidaturas, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, en el ámbito de sus competencias, le requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de incumplimiento se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes."

Lo antes transcrito pone de relieve que la reforma legal en materia de paridad realizada por el Poder Legislativo Federal estableció reglas que trascienden en la postulación e integración de los cuerpos legislativos federal y locales, al igual que los ayuntamientos.

En este sentido, si bien, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41, constitucional, no se pasa por alto que, en la actualidad, existe un marco jurídico que posibilita el ejercicio del derecho humano a la igualdad, mediante la paridad."

Asimismo, debe precisarse que al versar el presente asunto, sobre temas relacionados a la implementación de acciones afirmativas por parte de la autoridad administrativa electoral local, encaminadas a lograr una integración paritaria del Congreso del Estado, este Tribunal advierte la obligación de juzgarlo con perspectiva de género, realizando un análisis reforzado del caso concreto, para detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que segregan a las personas por condición de sexo o género, considerando las situaciones de

desventaja que, por dicha condición, discriminan e impiden la igualdad, visualizando su problemática y garantizando su acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria.

Ello, pues si bien la obligación de juzgar con tal perspectiva debe operar como regla general, es deber de los juzgadores hacer énfasis cuando se esté ante grupos especialmente vulnerables como las mujeres, en cuyo caso debe determinarse la operabilidad del derecho conforme a los preceptos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, procurando que los paradigmas de discriminación por razón de género no interfieran negativamente en la impartición de justicia, tal como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XX/2015,13 de rubro: **“IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA”**, pues dicha obligación exige una actuación que remedie los potenciales efectos discriminatorios que la normativa y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las mujeres, conforme a los artículos 1° y 17 de la Constitución, así como 8.1 y 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Una vez sentadas las directrices que conforme a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deben guiar el estudio y resolución de las controversias sobre la implementación del mandato constitucional en materia de paridad de género; es preciso aclarar que en el Estado de Sonora, el mandato constitucional de armonización legislativa en materia de paridad de género, se cumplió mediante la aprobación del Decreto 120 por parte del Poder Legislativo Estatal, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el día veintinueve de mayo de dos mil veinte, cuyo artículo SEGUNDO, contiene reformas a diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en materia de alternancia y paridad de género; sin perjuicio de que desde el año dos mil dieciséis, se establecieron dichos principios con la reforma del artículo 150-A de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora, a la letra dice:

“...ARTÍCULO 150-A.- En el Estado, las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos civiles y políticos; de manera igualitaria podrán ser electas y electos y tendrán derecho a voto en cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos que señalan esta Constitución y las leyes aplicables.

Los partidos políticos o coaliciones deberán garantizar en la postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría relativa, la paridad entre los géneros en la totalidad de sus candidaturas, debiendo sus fórmulas de propietario y suplente estar compuestas por candidatos del mismo género en la elección que se trate. En las listas de fórmulas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional deberá observarse la paridad entre los géneros y se integrarán por fórmulas de género distintos en forma alternada en la elección correspondiente.

En los procesos electorales municipales que se rige por el principio de mayoría relativa se observará la paridad horizontal y vertical para ambos géneros. Las planillas deberán integrarse por candidatos propietarios y suplentes del mismo género.

Se entenderá por paridad de género vertical en la postulación de los candidatos de planillas de ayuntamientos, la obligación de los partidos políticos o coaliciones, de salvaguardar en todo momento la paridad y la igualdad entre los géneros. En las

candidaturas que integren cada planilla de Ayuntamiento deberá alternarse el género en la elección respectiva.

Se entenderá por paridad de género horizontal la obligación de los partidos políticos y coaliciones para salvaguardar la postulación de 50% de candidatas y 50% de candidatos, respeto de la totalidad de candidaturas a presidentes municipales en el proceso electoral correspondiente...”.

Asentado lo anterior, se procede a dividir el análisis del presente asunto en dos vertientes principales, a saber, la relativa a los Criterios para Garantizar la Paridad en la Etapa de Resultados y los relacionados con el Registro de Candidaturas a Diputadas y Diputados el Principio de Representación Proporcional; aclarando que por cuestión de método, se analizarán en el siguiente orden.

a) Agravios relacionados con la etapa de Registro de Candidatos a Diputados de Representación Proporcional.

En primer término, resulta infundado el agravio hecho valer por el partido político actor, en el sentido de que la disposición contenida en el artículo 9, fracción II, inciso c), segundo párrafo, de los Lineamientos impugnados, en los hechos deroga o inaplica lo previsto por el artículo Tercero Transitorio del Decreto 120 que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, al establecer el requisito de que las listas de fórmulas de candidaturas a diputados y diputadas por el principio de representación proporcional que registren los partidos políticos para el presente proceso electoral, deberá iniciar con el género femenino, sobre la base de que en el proceso electoral anterior 2017-2018, casi la totalidad de las listas registradas por los institutos políticos iniciaron con el género masculino.

Se afirma lo anterior, debido a que, contrario a lo alegado por el recurrente, la referida disposición contenida en los lineamientos, en nada altera el sentido de la reforma al artículo 170 de la ley electoral local y menos aún su correlativa disposición transitoria, pues la acción afirmativa implementada para el presente proceso, es independiente y tiene una justificación histórica que se precisa en el acuerdo combatido.

Así es, el artículo 170 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, textualmente establece:

“...ARTÍCULO 170.- El Ejercicio del Poder Legislativo del estado se depositará en una Asamblea de Representantes del Pueblo, denominada “Congreso del estado de Sonora”.

El Congreso estará integrado por 21 diputadas y diputados propietarios y sus respectivos suplentes, electos en forma directa por el principio de mayoría relativa, en igual número de distritos uninominales, y hasta por 12 diputadas y diputados electos por el principio de representación proporcional, conforme a las siguientes disposiciones:

I.- Se elegirá una diputada o diputado por el principio de mayoría relativa, en cada uno de los distritos electorales; en el caso de municipios que abarquen dos o más Distritos Electorales en su demarcación, bastará con acreditar la vecindad

y residencia en dicho municipio para contender por el cargo de diputada o diputado en cualquiera de los Distritos que lo integran. En caso de que un partido político, ya sea por sí solo, como coalición o en candidatura común, registre un número impar de candidaturas por el principio de votación mayoritaria relativa, **deberá alternar el género mayoritario cada período electivo.**

II.- Se asignarán hasta doce diputaciones por el principio de representación proporcional de conformidad con lo siguiente:

a) A todos los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el 3 % del total de la votación estatal emitida, se les asignará una diputación; y

b) La fórmula para asignar las diputaciones de representación proporcional restantes, en su caso, tiene dos elementos: cociente natural y resto mayor.

Las asignaciones a que se refieren la fracción II se realizarán mediante un sistema de listas de 12 fórmulas a diputaciones por el principio de representación proporcional que registrarán los partidos políticos ante el Instituto Estatal. Cada fórmula estará compuesta por una o un candidato a diputado propietario y un o una suplente, quienes deberán ser del mismo género. En las listas los partidos políticos definirán el orden de prelación, colocando en forma sucesiva a una fórmula de género femenino seguida de una fórmula de género masculino, o viceversa, de tal modo que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos. **La lista que registre cada partido político será encabezada por un género distinto al que encabezó el registro en el proceso electoral inmediato anterior.**

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación válida emitida en la elección que se trate. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en los distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida, más el 8%. Asimismo, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación válida que hubiere recibido menos 8 puntos porcentuales.

Los diputados podrán ser electos, de manera consecutiva, hasta por cuatro periodos consecutivos sin que la suma de dichos periodos exceda de doce años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o candidatura común que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Los diputados que se encuentren en ejercicio y pretendan su elección consecutiva, deberán separarse de sus cargos, a más tardar un día antes de la fecha en que presente su registro como candidato...".

Asimismo, el artículo Tercero Transitorio del Decreto 120 que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el veintinueve de mayo del presente año, establece:

"ARTÍCULO TERCERO.- La observancia del principio de alternancia en la elección de diputados locales a que se refiere este Decreto, será aplicable a quienes sean electos en el proceso electoral inmediato posterior al proceso electoral 2020-2021."

Por su parte, el artículo 9, fracción II, inciso c), segundo párrafo, de los Lineamientos que Establecen los Criterios de Paridad de Género que Deberán Observarse en el Proceso Electoral 2020- 2021 en el Estado de Sonora, previene:

“Artículo 9. Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, para el registro de candidaturas a diputadas y diputados, deberán cumplir con lo siguiente:

I...

...

II. Para diputaciones por el principio de representación proporcional:

a)...

...

...

c) Paridad de género vertical.

El total de la lista para diputaciones por este principio, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres.

La lista de fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional que registre cada partido político deberá ser encabezada por el género femenino.”.

Como se puede apreciar, las normas anteriormente transcritas, además de tener una jerarquía diversa, cada una de ellas tiene un ámbito de aplicación instrumental, que no se contrapone, sino que se complementa, debido a que contrario a lo alegado por el inconforme, la acción afirmativa dispuesta en los lineamientos, en el sentido de que todas las listas que registren los partidos políticos inicien con el género femenino en el presente proceso, **en nada altera o modifica la disposición contenida en el artículo Tercero Transitorio del Decreto 120**, en el sentido de que la regla de alternancia en el primer lugar de la lista de candidatos a diputados de representación proporcional, prevista en el artículo 170 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, comenzará a aplicar en el proceso electoral 2023-2024; puesto que efectivamente, llegado ese proceso, se tendrá que analizar el orden de prelación tomado en el presente proceso, y con base en ello, aplicar la alternancia en el género que encabece la lista correspondiente.

Esto es así, debido a que la acción afirmativa contenida en el artículo 9, fracción II, inciso c), segundo párrafo, de los Lineamientos que Establecen los Criterios de Paridad de Género que Deberán Observarse en el Proceso Electoral 2020- 2021 en el Estado de Sonora, obedece, no sólo a que en el proceso electoral pasado la mayoría de los partidos políticos colocaron varones en el primer lugar de la lista de candidatos a diputados plurinominales, sino a una larga historia en la que la integración del Congreso del Estado, se ha caracterizado por la predominancia del género masculino, tal y como se detalla ampliamente en los numerales 48 y 49 de la parte considerativa del acuerdo general impugnado, donde se establece lo siguiente:

“...48. Que el artículo 170, párrafo quinto de la LIPEES, respecto a las asignaciones de hasta doce diputaciones por el principio de representación proporcional, que integrarán el H. Congreso del Estado de Sonora, establece lo siguiente:

“Las asignaciones a que se refieren la fracción II se realizarán mediante un sistema de listas de 12 fórmulas a diputaciones por el principio de representación proporcional que registrarán los partidos políticos ante el Instituto Estatal. Cada fórmula estará compuesta por una o un candidato a diputado propietario y un o una suplente, quienes deberán ser del mismo género. En las listas los partidos políticos definirán el orden de prelación, colocando en forma sucesiva a una fórmula de género femenino seguida de una fórmula de género masculino,

viceversa, de tal modo que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos. **La lista que registre cada partido político será encabezada por un género distinto al que encabezó el registro en el proceso electoral inmediato anterior.**

En relación a lo anterior, se tiene que en fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 120, que reforma diversas disposiciones de la LIPEES, en materia de paridad de género y violencia política de género, el cual en su transitorio Tercero, se estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO TERCERO.- La observancia del principio de alternancia en la elección de diputados locales a que se refiere este Decreto, será aplicable a quienes sean electos en el proceso electoral inmediato posterior al proceso electoral 2020-2021.”

En ese sentido, es importante precisar que el citado párrafo quinto, del artículo 170 de la LIPEES, establece que la lista que registre cada partido político será encabezada por un género distinto al que encabezó el registro en el proceso electoral inmediato anterior, sin embargo, el transitorio Tercero de la reforma en comento, señala que dicha disposición **será aplicable a quienes sean electos en el proceso electoral inmediato posterior al proceso electoral 2020-2021, es decir, no es aplicable en el proceso electoral que nos ocupa.**

No obstante lo anterior, es dable notar, que la intención del legislador con la multicitada reforma a la LIPEES, publicada en fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte, fue impulsar acciones que garanticen a las mujeres de nuestro estado, equidad en la contienda y condiciones de paridad de género para asumir los cargos de elección popular, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

En relación a lo anterior, se tiene que en el proceso electoral ordinario local 2017-2018 en el estado de Sonora, mediante los Acuerdos CG115/2018, CG116/2018, CG117/2018, CG118/2018, CG119/2018, CG120/2018, CG121/2018 y CG122/2018, todos de fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Morena, respectivamente, registraron ante este Instituto Estatal Electoral, sus listas de candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, y de lo cual se advierte que casi la totalidad de los referidos partidos políticos registraron en el lugar número uno, encabezando las respectivas listas, fórmulas integradas por el género masculino, con excepción del partido político Movimiento Ciudadano.

Por lo anterior es que se propone una acción afirmativa tendentes a garantizar una integración paritaria del Congreso, respetando los principios rectores de la materia electoral, al buscar que la postulación que hagan los partidos de las listas de fórmulas de candidaturas de diputaciones por el principio de representación proporcional sea encabezada por el género femenino.

49. Por lo anterior, y teniendo como antecedente lo sucedido en el proceso electoral 2017-2018, respecto de que predominaron las fórmulas integradas por el género masculino en la primera posición de los listados de diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, y tomando en cuenta la intención del legislador en la citada reforma en materia de paridad de género, se hace necesario que este Instituto Estatal Electoral lleve a cabo una acción afirmativa, con el propósito de constituir una medida razonable, proporcional y objetiva orientada a la igualdad material, y con ello alcanzar una representación equilibrada y paritaria, misma que se materializará en la próxima integración del H. Congreso del Estado de Sonora, en el sentido de que la lista que registre cada partido político será encabezada por el género femenino.

Que con la acción afirmativa que se propone, se pretende garantizar en mayor medida las condiciones para el disfrute de los derechos de las mujeres, para lo cual se hizo necesario realizar un análisis contextual, normativo y fáctico, conforme a lo siguiente:

a) Lo establecido en el artículo 170 de la LIPEES, respecto a que la lista de fórmulas de representación proporcional que registre cada partido político será encabezada por un género distinto al que encabezó el registro en el proceso electoral inmediato anterior, en relación con lo dispuesto en el artículo transitorio Tercero de la reforma publicada en fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte, respecto que dicha disposición será aplicable a quienes sean electos en el proceso electoral inmediato posterior al proceso electoral 2020-2021, es decir, no es aplicable en el proceso electoral que nos ocupa.

b) El H. Congreso del Estado de Sonora, se integra por un total de 33 diputadas y diputados, de los cuales 21 son electos por el principio de mayoría relativa, y hasta 12 son electos por el principio de representación proporcional, con lo cual, se tiene que cada diputación corresponde al 3.03% del total de las y los integrantes del Congreso.

c) Como contexto histórico, tenemos que en la elección del proceso electoral ordinario local 2017-2018, los partidos políticos registraron ante este Instituto Estatal Electoral, sus listas de candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, y de lo cual se advierte que casi la totalidad de los referidos partidos políticos registraron en el lugar primero de las respectivas listas, fórmulas integradas por el género masculino, por lo que, actualmente el H. Congreso del Estado de Sonora se encuentra integrado por 14 diputaciones del género femenino y 19 diputaciones del género masculino, predominando con ello, el género masculino en la integración de la actual Legislatura.

Asimismo, al realizar un análisis sobre las anteriores integraciones del Congreso, podemos observar como ejemplo, que la legislatura correspondiente a los años 2015-2018 se encontraba integrada por solamente 13 diputaciones del género femenino y 20 del género masculino, la legislatura 2012-2015 por solamente 8 diputaciones del género femenino y 25 del género masculino y la legislatura 2009-2012 por solo 7 diputaciones del género femenino y 26 del género masculino.

Con ello, tenemos que, actualmente y en los años anteriores, el Congreso del Estado, ha estado integrado por una mayoría de diputaciones correspondientes al género masculino.

d) Con la implementación de una acción afirmativa para el caso que nos ocupa, se garantiza el principio de igualdad entre hombres y mujeres; se promueve y acelera la participación política de las mujeres en cargos de elección popular, y se elimina cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural. En dicho sentido, uno de los propósitos de la aplicación de la medida afirmativa de mérito para lograr la paridad de género en la integración del H. Congreso del Estado de Sonora, es lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, lo anterior, previendo que la implementación de esta medida, no se traduce en una afectación desmedida a los otros principios rectores de la materia electoral.

En dicho sentido, se tiene que con la acción afirmativa que se propone, se pondera el principio de paridad de género con otros principios constitucionales en la integración de los órganos representativos, ello, sin transgredir el principio de certeza en las condiciones de la competencia y sin afectar los derechos de terceros.

Tal y como lo señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia dentro del expediente SUP-REC-1368/2018, en el que hace mención a las medidas afirmativas adoptadas en el estado de Yucatán, en dicho asunto se consideró que cuando las medidas contempladas en la normativa electoral estatal, resulten insuficientes para dotar de contenido el principio constitucional de paridad de género, y por ello se genere una condición de sub-representación de las mujeres, es factible establecer, medidas tendentes a la paridad, siempre que no se afectaran de manera desproporcionada otros principios rectores de la materia electoral, esto es, se consideró que la forma en que se integran las listas para la asignación de diputaciones por el principio de

representación proporcional, no permitía una óptima materialización del principio de paridad de género.

Lo anterior, situación similar a la que se presenta en nuestro estado, en relación a la integración paritaria del H. Congreso del Estado, en la cual se atienden factores relacionados con una normativa insuficiente y el contexto histórico desfavorable para la participación política de las mujeres en la integración del referido Congreso...”.

Ante esta situación, contrario a lo alegado por el agravista, no se trata de la imposición de una norma jurídica pendiente de entrar en vigor derivado de la *vacatio legis* establecida por los legisladores, sino de la aplicación de una acción afirmativa a favor de las mujeres, situación que evidencia la intención del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de buscar medidas que apoyen a lograr una paridad en todo sentido y de forma amplia, lo cual es acorde a la reforma constitucional en materia de paridad de género y su interpretación a través de los precedentes emitidos tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sobre todo si se considera que al analizar la razonabilidad de la acción afirmativa prevista en los lineamientos impugnados, a la luz de lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a.CCLXIII/2016, de rubro: “**TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL**”, este Tribunal llega a la conclusión de que la misma:

a) Persigue un fin constitucionalmente legítimo, pues el mandato de paridad contenido en el artículo 41 de la Constitución busca maximizar el derecho humano a la igualdad entre la mujer y el varón, contenido en el artículo 4º constitucional, remontando el escenario de desigualdad en el acceso de las mujeres al Congreso de Sonora;

b) Es idónea, pues busca alcanzar los fines constitucionales ya mencionados vinculando a los institutos políticos a colocar mujeres en los primeros lugares de sus listas de candidaturas a una diputación de representación proporcional, lo cual elevaba sustancialmente sus probabilidades de acceso al Congreso Estatal, en beneficio de la igualdad material;

c) Resulta necesaria, al no ser la más gravosa con los principios intervenidos, ya que no vaciaba de contenido el derecho de los partidos políticos a configurar sus listas y fórmulas para postular candidaturas de acuerdo con su normativa estatutaria, además de que su implementación ocurría antes de la votación; y,

d) Es proporcional, pues su implementación en estos momentos del proceso electoral implica una intervención mínima en los principios de reelección, autodeterminación partidista, certeza y seguridad jurídica, potencializando el derecho humano a la igualdad material entre mujeres y hombres, así como el mandato de paridad.

En consecuencia, se estima que la implementación de la acción afirmativa de mérito, maximiza la participación de la mujer, sensibilizando sobre la necesidad de establecer políticas públicas tendentes a lograr la paridad sustantiva, sin que ello implique una reducción de escaños a los institutos políticos ni una incidencia importante en el principio democrático pues, en mayor medida, el voto de las candidaturas propuestas en una lista de representación proporcional, es producto del respaldo del electorado a cada uno de los partidos políticos, por lo que todas las personas que integran tales listas gozan de legitimidad democrática.

Sin perjuicio de que, a juicio de este Tribunal, la referida acción afirmativa, guarda congruencia con lo dispuesto por el artículo Tercero Transitorio de la reforma constitucional en materia de paridad de género, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil diecinueve, el cual establece, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

"TERCERO.- La observancia del principio de paridad de género a que se refiere el artículo 41, será aplicable a quienes tomen posesión de su encargo, a partir del proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, según corresponda."

De esto anterior podemos obtener que el hecho de que mediante una acción afirmativa el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, procure armonizar el espíritu de la reforma constitucional, estableciendo la obligación de que en el presente proceso electoral ordinario, las listas de candidatos y candidatas a diputados de representación proporcional sean encabezadas por mujeres, lejos de ser contraria a la ley, resulta en una medida catalizadora del efecto igualador que pretende tener la citada reforma constitucional, pues en vez de postergar sus efectos, los trae al presente, de tal forma que en la integración de la legislatura local 2021-2024, se haga realidad la paridad de género, dejando atrás la subrepresentación histórica de las mujeres, en dicho campo.

b) Agravios relacionados con los Criterios para Garantizar la Paridad en la Etapa de Resultados.

Ahora, bien, por lo que hace a los agravios relacionados con los Criterios para Garantizar la Paridad en la Etapa de Resultados, a juicio de este Tribunal, los mismos resultan parcialmente fundados por las siguientes razones.

En primer término, se estima infundado el agravio esgrimido por el inconforme en el sentido de que al emitir el acuerdo impugnado, la autoridad responsable ha inaplicado el procedimiento de asignación de diputados por el principio de representación proporcional establecido en el artículo 170 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque contrario a ello, ejerció su facultad de reglamentar y estableció los criterios sobre paridad de género previstos en las bases constitucionales y legales, previendo la posibilidad de implementar una acción afirmativa para el caso de que una vez aplicado el procedimiento de asignación de curules establecido por la norma jurídica en cita, se advirtiera que existe una sub representación del género femenino, cuando la diferencia

entre ambos géneros sea igual o mayor a tres diputados, en cuyo caso el Consejo General, comenzaría a realizar un procedimiento extraordinario de compensación, modificando el orden de prelación de la listas registradas, a favor de género en desventaja; de ahí, que los argumentos relacionados con la inaplicación del procedimiento de asignación previsto por la ley electoral local, resulten infundados, según se dijo, al partir de una premisa errónea del partido recurrente.

Además de que tampoco se vulnera el principio de certeza o de reserva de ley, porque la eventual aplicación de los criterios de paridad prevista en los Lineamientos, no modifica el procedimiento cuestionado, ya que la regulación no implica una alteración a la norma prevista desde la propia Constitución Federal, sino su reglamentación, lo que no atenta contra el artículo 105 de la propia Norma Suprema, como lo pretende ver el actor.

En este punto también cabe destacar, que al resolver la Contradicción de tesis 275/2015, en el mes de junio de dos mil diecinueve, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el principio constitucional de paridad de género no se agota con la postulación de candidaturas de determinado género, sino que trasciende a la integración de los órganos legislativos locales, por lo que las autoridades de las entidades federativas, se encuentran obligadas adoptar medidas tendentes a la paridad en la integración de las listas de candidaturas de representación proporcional, aunque éstas se definan después de la jornada electoral.

En cuanto a lo alegado por el partido político actor, en el sentido de que lo establecido en el Capítulo IV denominado "*Criterios para garantizar la paridad en la etapa de resultados*" de los Lineamientos que se impugnan, desnaturaliza el sufragio emitido por la ciudadanía y vulnera el derecho de voto activo previsto en el artículo 35 de la Constitución Federal; tampoco le asiste la razón, toda vez que las acciones afirmativas que se implementan en el referido capítulo de los Lineamientos, no modifican la voluntad popular, sino prevén las medidas necesarias para asegurar el principio de paridad en la etapa de asignación de diputados de representación proporcional, al prescribir que los listados de candidaturas comiencen por el género, no se afecta el escaño ganado por el partido, sino que únicamente se cambia el género en caso de que el femenino sea desfavorecido, para hacer los ajustes en materia de paridad, lo que no significa que el partido pierda su curul y mucho menos que no se respete la voluntad popular.

Con relación a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia que resolvió el expediente SUP-REC-1368/2018, estableció que la autoridad electoral debe valorar los avances y resultados que se han alcanzado hasta este momento, con las medidas implementadas en la legislación y en sede administrativa, en relación con el acceso efectivo de las mujeres a los cargos de elección popular en las entidades, para identificar las insuficiencias que se deben atender, y que a partir de dicho análisis, los institutos locales deberán decidir cuáles son los lineamientos adecuados y necesarios para asegurar que los órganos de elección popular estén conformados de manera paritaria; señalando además que, la autoridad electoral tiene

libertad de atribuciones y un margen de decisión para adoptar tanto medidas afirmativas de postulación como de impacto directo en la integración, con la condicionante de que cumplan de manera efectiva con la finalidad señalada, esto es, que el órgano legislativo se integre paritariamente.

Sobre este particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Tesis 12/2019, ha establecido lo siguiente:

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LAS ACCIONES PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN PARITARIA DE UN CONGRESO LOCAL QUE REAJUSTEN LAS LISTAS DE CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON DERECHO A ESCAÑOS POR ESE PRINCIPIO, NO VULNERAN EL DERECHO FUNDAMENTAL A VOTAR. Un análisis integral de los artículos 35, fracción I, 41, fracción I, párrafo segundo, y 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal, muestra que el derecho fundamental a votar en una elección de diputaciones locales por el principio de representación proporcional protege únicamente la emisión del sufragio a favor de un partido político (o coalición de partidos), pero no la elección de una persona o fórmula de personas en específico. Mientras que el propósito esencial de la representación proporcional es favorecer la pluralidad del órgano deliberativo, considerar que el derecho fundamental a votar bajo este principio electivo protege a su vez la selección de una persona en particular comprometería la realización de diversos fines constitucionales a los que los partidos políticos están obligados a contribuir como entidades de interés público, entre ellos la paridad de género en la integración de los órganos legislativos locales. En esta tesitura, las acciones que para la asignación de diputaciones de representación proporcional reajusten las listas definitivas de los partidos políticos con derecho a escaños y, por consiguiente, otorguen curules a los candidatos de un género sub-representado en el partido favorecido, no vulneran el derecho fundamental de los ciudadanos al sufragio activo. Ciertamente, la implementación concreta de esas medidas correctivas no está exenta de ser considerada violatoria de otros preceptos constitucionales, ni de tener que ceder cuando se oponga a algún otro derecho fundamental o principio rector en materia electoral. Sin embargo, en tanto que no hay colisión posible con el derecho al voto activo, tal reajuste no será inconstitucional por vulnerar la fracción I del artículo 35 de la Constitución Federal. Así, el derecho fundamental a votar por legisladores locales de representación proporcional no puede ser, por sí mismo, un argumento válido para que las entidades federativas dejen de implementar acciones tendientes a la paridad de género en la asignación de escaños por dicho principio electivo ni, por tanto, para dejar de favorecer a través de esas medidas correctivas la integración paritaria de los Congresos Locales.

Como se puede apreciar, el más alto Tribunal del país, sostiene que las acciones que, para la asignación de diputaciones de representación proporcional reajusten las listas definitivas de los partidos con derecho a escaños y, por consiguiente otorguen curules a los candidatos de un género sub-representado en el partido favorecido, no vulneran el derecho fundamental de los ciudadanos al sufragio activo previsto en el artículo 35, fracción I de la Constitución Federal; ya que la paridad de género, bajo la implementación de las medidas afirmativas contenidas en los lineamientos impugnados, debe considerarse como un mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de mujeres, y no como una desnaturalización del sufragio emitido por la ciudadanía como erróneamente lo señala el actor, toda vez que con la implementación de las referidas acciones afirmativas, se justifica un mayor beneficio para las mujeres en el Estado de Sonora, con la única finalidad de elevar la representación política de las mujeres como respuesta a la discriminación histórica de la que éstas han sido parte, y con ello eliminar la segregación.

existente, remediar la pasada y prevenir la futura, y asegurar que tanto las mujeres como los hombres tengan igualdad de oportunidades para competir por cualquier puesto de toma de decisiones o de ejercicio del poder, sin violentar los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica.

Tampoco le asiste la razón al partido político actor, cuando alega que la facultad de interpretación de la ley está reservada a las autoridades jurisdiccionales; ello desde el momento de que el tercer párrafo del artículo 1 de la Carta Fundamental de la Unión, señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de manera que los organismos electorales locales, no son la excepción.

En atención a ello, aun cuando en la formulación de las disposiciones normativas que incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, no se incorporen explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio; es decir, la que implique una participación mayor de mujeres.

A este respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, el aprobar la jurisprudencia 13/2018, se pronunció en el sentido de:

PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES.

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º, párrafo quinto, 4º y 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral 1, y 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que la paridad y las acciones afirmativas de género tienen entre sus principales finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 2) promover y acelerar la participación política de las mujeres en cargos de elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural. En consecuencia, aunque en la formulación de las disposiciones normativas que incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, no se incorporen explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. Lo anterior exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres. Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de dichas normas y a la finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos que justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso concreto.

Por tanto, al emitir los lineamientos impugnados, en realidad la autoridad administrativa está privilegiando el principio de paridad establecido en la Constitución, de manera que en modo alguno viola los principios de legalidad y certeza, como lo afirma el actor.

Tampoco se puede calificar como fundado el agravio relativo a que la autoridad responsable aprobó los lineamientos impugnados sin contar las facultades para ello, pues, a su juicio, del análisis de los artículos 101, 110, 111, 114 y 121 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, no se desprende atribución alguna para llevar a cabo una acción afirmativa que implique la alteración del orden de prelación de las listas de candidatos a diputadas y diputados de representación proporcional, registradas por los partidos políticos y, por el contrario, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sólo puede resolver sobre el registro de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, vigilando que principio de igualdad de género con base en las reglas establecidas en la ley electoral local.

Lo anterior es así, toda vez que, de acuerdo a los criterios jurisprudenciales y precedentes que han quedado precisados, conforme a los artículos 4, 41 y 116 de la Constitución Federal así como 22 de la Constitución del Estado de Sonora y demás disposiciones legales y convencionales que han quedado precisadas; el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, no sólo se encuentra facultado, sino obligado a implementar acciones dentro del ámbito de sus competencias, para llevar a cabo las medidas necesarias para hacer vigente el mandato constitucional de la paridad de género.

Además de que, según se indicó, la propia jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otorga facultades a las autoridades, entre ellas a la administrativa electoral local, para aplicar acciones afirmativas tendentes a privilegiar la paridad con beneficios para las mujeres. Luego entonces, no asiste razón al accionante.

Una vez precisado lo anterior, a juicio de este Tribunal, le asiste la razón al inconforme cuando alega que el acuerdo impugnado, viola los principios de legalidad y certeza, rectores de la materia electoral, puesto que, aun cuando es constitucionalmente válido que la autoridad administrativa, mediante la emisión de lineamientos, prevenga la implementación de acciones afirmativas, en el caso concreto, del análisis minucioso del acuerdo impugnado, aparece una causa que priva de eficacia las disposiciones contenidas en los artículos 16 y 17 de los multicitados lineamientos, que lejos de beneficiar al género femenino limita de forma arbitraria su avance para alcanzar la paridad en la integración del Congreso del Estado.

Así es, los artículos 16 y 17 de los Lineamientos que Establecen los Criterios de Paridad de Género que Deberán Observarse en el Proceso Electoral 2020- 2021 en el Estado de Sonora, establecen lo siguiente:

“...Artículo 16. Con la finalidad de garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, el Instituto

Estatal Electoral adoptará una acción afirmativa, consistente en que por regla general, para la asignación de cargos de diputaciones de representación proporcional, debe respetarse el orden de prelación de la lista de candidaturas registradas, sin embargo, si al respetarse ese orden se advierte que la diferencia implica un sesgo de un género sobre el otro, se procederá a establecer medidas tendentes a lograr el principio de paridad, siempre que no afecten de manera desproporcionada otros principios constitucionales, como es el de no discriminación.

Artículo 17. *En el supuesto de que una vez agotado el procedimiento de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional previsto en el artículo 170 de la LIPEES, se advirtiera que la diferencia implica un sesgo de un género sobre el otro, se procederá a establecer medidas tendentes a lograr el principio de paridad, e implementará una acción afirmativa consiste en un ajuste por razón de género, sustituyendo tantas fórmulas del género masculino como sean necesarias, hasta alcanzar la paridad, conforme al siguiente procedimiento:*

a) *Se realizará una pre asignación en estricto orden de prelación de las fórmulas registradas por cada partido político que tengan derecho a la asignación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 170 de la LIPEES;*

b) *En el supuesto de que una vez realizada la asignación conforme a las listas se advirtiera que existe una sub representación del género femenino, **cuando la diferencia entre ambos géneros sea igual o mayor a 3 diputados**, en cuyo caso se determinará cuántas diputaciones de representación proporcional son necesarias otorgar a las candidaturas del género femenino y retirar a las candidaturas del género masculino para lograr la integración paritaria del Congreso, atendiendo a la conformación con las fórmulas que obtuvieron el triunfo por el principio de mayoría relativa...”*

La interpretación sistemática y funcional de las anteriores normas jurídicas, no puede ser otra que aquella que permita concluir que con la implementación de la acción afirmativa combatida por el actor, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, establece posibilidad de alterar el orden de prelación de la listas registradas, a favor de género femenino, sin que se cumpla debidamente con los requisitos de proporcionalidad e idoneidad exigidos para la implementación de una acción afirmativa; en virtud de que la medida resulta arbitraria al no justificar por qué se debe tomar en consideración como sesgo igual o mayor de tres diputados, para la satisfacción del principio de paridad de género.

Se afirma lo anterior, debido a que, tal y como se ha dejado ampliamente establecido en el presente proyecto, si bien resulta constitucionalmente válido la implementación de acciones afirmativas, para favorecer el cumplimiento de principios constitucionales en favor de grupos históricamente desfavorecidos, como lo es en el presente caso el mandato de paridad de género para que el Congreso del Estado se integre en la mayor medida posible por hombres y mujeres de forma paritaria; la única condicionante es que con su aplicación, no se vulneren gravemente otros principios constitucionales, y la medida resulte justificada, idónea y proporcional para el caso concreto; desde el momento en que la autoridad responsable, de forma arbitraria estableció un umbral o tolerancia de igual o mayor a tres diputados de diferencia a favor del género masculino, sin dar los razones o motivos que justifiquen tal medida, en virtud de que conforme al mandato constitucional, en el caso del Congreso del Estado de Sonora, integrado hasta por treinta y tres diputados y diputadas, la

meta ideal de paridad debería de ser la diferencia mínima de un diputado, pero de igual forma podría establecerse un parámetro de hasta cinco, porque al existir una diversa acción afirmativa en el que se establece la obligación de que los partidos políticos encabecen sus listas de representación proporcional con el género femenino; el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, debió establecer de forma fundada y motivada, el porqué de su determinación y sobre todo exponer la razonabilidad del margen de disparidad establecido, lo que no hizo.

De ahí que en aras de privilegiar la participación política de las mujeres y los hombres en condiciones de igualdad y disipar las barreras que limiten o restrinjan el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género, lo procedente es modificar el acuerdo impugnado para el efecto de eliminar los artículos 16 y 17 de los Lineamientos que Establecen los Criterios de Paridad de Género que Deberán Observarse en el Proceso Electoral 2020- 2021 en el Estado de Sonora; en tanto que los mismos se consideran un obstáculo que lejos de ayudar a las mujeres las limita o frena en su aspiración de paridad.

Sobre todo, si se considera que, al analizar la acción afirmativa de mérito, bajo el test de proporcionalidad tazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que, a pesar de perseguir un fin constitucionalmente legítimo, no es idónea ni proporcionada, por las razones acabadas de explicar.

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia.

En virtud de lo anterior, al resultar fundado el agravio hecho valer por el partido político apelante, con relación a la acción afirmativa consistente en el mecanismo de verificación de paridad de género en la etapa de resultados; lo procedente es MODIFICAR el ACUERDO CG35/2020 *"POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE PARIDAD DE GÉNERO QUE DEBERÁN OBSERVARSE EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA."*, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria de fecha quince de septiembre de dos mil veinte, para el único efecto de eliminar los artículos 16 y 17 de los Lineamientos que Establecen los Criterios de Paridad de Género que Deberán Observarse en el Proceso Electoral 2020- 2021 en el Estado de Sonora; quedando firmes el resto de sus disposiciones.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 343, 344 y 345 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se resuelve el presente asunto bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando SEXTO del presente fallo, se declaran infundados en parte y fundados en otra, los agravios hechos valer por el partido político inconforme, en consecuencia:

SEGUNDO. Se MODIFICA el ACUERDO CG35/2020 "POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE PARIDAD DE GÉNERO QUE DEBERÁN OBSERVARSE EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA.", aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria de fecha quince de septiembre de dos mil veinte, para el único efecto de eliminar los artículos 16 y 17 de los Lineamientos que Establecen los Criterios de Paridad de Género que Deberán Observarse en el Proceso Electoral 2020- 2021 en el Estado de Sonora; debiendo permanecer firmes el resto de sus disposiciones.

NOTIFÍQUESE personalmente a las partes en el domicilio señalado en autos; por oficio, con copia certificada que se anexe de la presente resolución, a la autoridad responsable, y por estrados a los demás interesados.

Así lo resolvieron por mayoría de votos, en sesión pública de fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, los Magistrados integrantes del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, Licenciados Leopoldo González Allard y Carmen Patricia Salazar Campillo, y el voto en contra del Licenciado Vladimir Gómez Anduro y, bajo la ponencia del primero de los mencionados, ante el Secretario General, Licenciado Héctor Sigifredo II Cruz Íñiguez, que autoriza y da fe. Conste.



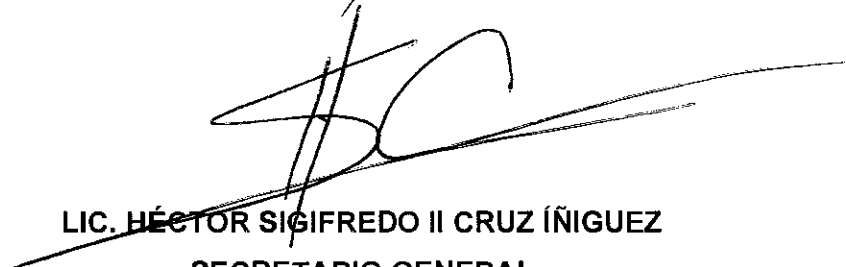
LIC. LEOPOLDO GONZÁLEZ ALLARD
MAGISTRADO PRESIDENTE



LIC. VLADIMIR GÓMEZ ANDURO
MAGISTRADO



LIC. CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO
MAGISTRADA



LIC. HÉCTOR SIGIFREDO II CRUZ ÍÑIGUEZ
SECRETARIO GENERAL

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO, EN EL RECURSO DE APELACIÓN RA-PP-07/2020.

Con fundamento en los artículos 307, segundo párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y los artículos 7, fracción IV y 11, fracción VI, del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Sonora; de manera respetuosa emito voto particular ya que, a diferencia de la mayoría del Pleno de este Tribunal, considero que los razonamientos que llevaron a ordenar la eliminación de los artículos 16 y 17 de los "*lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el proceso electoral 2020- 2021 en el estado de sonora*" son incorrectos y contradictorios entre sí, por las razones que a continuación expresaré.

Planteamiento de la divergencia de criterios.

Con el propósito de ser más preciso en mi argumentación, en primer término estableceré en qué parte de la sentencia se presenta la divergencia de criterios y posteriormente expresaré las razones por las que no comparto los razonamientos de la mayoría.

En concreto, la divergencia se presenta respecto al análisis que en la sentencia se hace de los referidos artículos 16 y 17, capítulo IV (CRITERIOS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD EN LA ETAPA DE RESULTADOS) de los citados lineamientos, mismos que establecen una acción afirmativa consistente en un *procedimiento de compensación* que busca garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado de Sonora mediante el *ajuste* en las listas de representación proporcional de los partidos políticos.

Por una parte, el artículo 16 señala que:

Con la finalidad de garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, el Instituto Estatal Electoral adoptará una acción afirmativa, consistente en que por regla general, para la asignación de cargos de diputaciones de representación proporcional, debe respetarse el orden de prelación de la lista de candidaturas registradas, sin embargo, si al respetarse ese orden se advierte que la diferencia implica un sesgo de un género sobre el otro, se procederá a establecer medidas tendentes a lograr el principio de paridad, siempre que no afecten de manera desproporcionada otros principios constitucionales, como es el de no discriminación.

Mientras que el diverso 17 establece que:

En el supuesto de que una vez agotado el procedimiento de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional previsto en el artículo 170 de la LIPEES, se advirtiera que la diferencia implica un sesgo de un género sobre el otro, se procederá a establecer medidas tendentes a lograr el principio de paridad, e implementará una acción afirmativa consiste en un ajuste por razón de género, sustituyendo tantas fórmulas del género masculino como sean necesarias, hasta alcanzar la paridad, conforme al siguiente procedimiento:

a) Se realizará una pre asignación en estricto orden de prelación de las fórmulas registradas por cada partido político que tengan derecho a la asignación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 170 de la LIPEES;

b) En el supuesto de que una vez realizada la asignación conforme a las listas se advirtiera que existe una sub representación del género femenino, cuando la diferencia entre ambos géneros sea igual o mayor a 3 diputados, en cuyo caso se determinará cuántas diputaciones de representación proporcional son necesarias otorgar a las candidaturas del género femenino y retirar a las candidaturas del género masculino para lograr la integración paritaria del Congreso, atendiendo a la conformación con las fórmulas que obtuvieron el triunfo por el principio de mayoría relativa.

Al respecto, en el considerando sexto, estudio de fondo, inciso b), agravios relacionados con los criterios para garantizar la paridad en la etapa de resultandos, página 33 de la resolución, se establece que:

le asiste la razón al inconforme cuando alega que el acuerdo impugnado, viola los principios de legalidad y certeza, rectores de la materia electoral, puesto que, aun cuando es constitucionalmente válido que la autoridad administrativa, mediante la emisión de lineamientos, prevenga la implementación de acciones afirmativas, en el caso concreto, del análisis minucioso del acuerdo impugnado, **aparece una causa que priva de eficacia las disposiciones contenidas en los artículos 16 y 17 de los multicitados lineamientos, que lejos de beneficiar al género femenino limita de forma arbitraria su avance para alcanzar la paridad en la integración del Congreso el Estado¹.**

Esencialmente la sentencia considera que la porción normativa del inciso b), del artículo 17 de los referidos lineamientos, que establece que **“cuando la diferencia entre ambos géneros sea igual o mayor a 3 diputados”** “resulta arbitraria” pues el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora (en lo sucesivo IEEyPC) “no justificó el por qué se debe tomar en consideración como sesgo igual o mayor de tres diputados, para la satisfacción del principio de paridad de género”, y esta simple razón la consideró suficiente para ordenar se eliminaran estos artículos.

Lo incorrecto de tal razonamiento radica en que, cuando el lineamiento hace referencia a **una diferencia entre ambos géneros igual o mayor a 3 diputados** no se trata de una determinación arbitraria sino aritmética, esto a partir de que el congreso local se integra por un número impar de 33 diputados, por lo que el ideal paritario de 50% hombres y 50% mujeres es imposible.

En ese sentido, la única integración paritaria posible y tolerable es la de 17 – 16, o viceversa, la cual de manera lógica tendría una diferencia de 1, y a partir de ese escenario, cualquier otro que se presente deberá ser corregido mediante la acción afirmativa.

Para hacer más ilustrativo el argumento lo represento en la siguiente tabla:

Hombres	Mujeres	Diferencia	Tolerable
16	17	1	Sí
17	16	1	Sí
18	15	3	No

¹ Énfasis añadido.

Como puede observarse, la diferencia de 3 o más diputados no es una determinación arbitraria sino una condición lógica y aritmética que de manera correcta los lineamientos pretenden corregir para llevar al único escenario paritario posible y tolerable, es decir 17 – 16 (o viceversa).

Lo contradictorio de tal razonamiento radica en que, por un lado, se reconoce tanto la necesidad de implementar acciones afirmativas, como las facultades del IEEyPC para implementarlas; pero por otro lado, a partir de que, como se ha establecido, erróneamente concluye que el IEEyPC “arbitrariamente” consideró como una sub representación del género femenino la diferencia entre ambos géneros igual o mayor a 3 diputados, decide que es preferible eliminar la acción afirmativa en lugar de corregirla, como se observa en el argumento de cierre, expuesto en la página 35, que dice:

De ahí que en aras de privilegiar las participación política de las mujeres y los hombres en condiciones de igualdad y disipar las barreras que limiten o restrinjan el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género, lo procedente es modificar el cuadro impugnado para el efecto de eliminar los artículos 16 y 17 de los Lineamientos que Establecen los Criterios de Paridad de Género que Deberán Observarse en el Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de Sonora; en tanto que los mismos se consideran un obstáculo que lejos de ayudar a las mujeres las limita o frena en su aspiración de paridad.

Por todo lo anteriormente expuesto me permito expresar este voto particular.



VLADIMIR GÓMEZ ANDURO
MAGISTRADO ELECTORAL